

EDITORIAL:

EL ESTADO ANÓMICO Y LA SEGURIDAD CON ENFOQUE EN LA CONVIVENCIA SOCIAL

Bertha García Gallegos*

Frente a las enormes dificultades para encontrar herramientas adecuadas contra la inseguridad, uno de los sociólogos más importantes del momento –Peter Waldman– recurre a la redefinición del concepto de anomia (central en la sociología clásica) para explicar por qué los estados latinoamericanos han sido incapaces de crear y consolidar un sistema de normas claras, estables, sancionables y aceptables para organizar el comportamiento de las sociedades orientándolas a superar sus debilidades estructurales. Waldman recurre al concepto de “estado anómico” en su libro del mismo nombre y presenta una teoría novedosa con evidencias empíricas guiadas por la hipótesis de que los Estados latinoamericanos han desarrollado características anómicas. Waldmann sostiene que el Estado puede llegar a ser anómico (contrario a lo que por definición es la naturaleza del Estado), que lejos de garantizar la paz interna y la seguridad pública, constituye una fuente particular de desorden e inseguridad para los ciudadanos. Las fuentes de esta tendencia perniciosa tienen que ver con el manejo arbitrario de las normas, de las políticas y de los recursos, así como la manipulación de la justicia.

En la sociología clásica se había tratado a la anomia como problema central de los individuos y las comunidades, sujetas a cambios drásticos, transiciones y desarraigo de sus valores y normas. El aporte de Waldman orienta el foco de atención al Estado, del cual se esperaba el papel de hacedor de las nuevas normas y orientador de la convivencia social. El autor acude al análisis del papel de «lo público» desde el siglo XVII hasta nuestros días, pone en

evidencia las modalidades arbitrarias del ejercicio de la violencia.

Estas reflexiones muy bien pueden enmarcar los temas que se presentan en este Boletín. Por una parte, el artículo de la colombiana Catalina Uribe Burcher desarrolla los aspectos centrales de la investigación aplicada en América Latina por parte de IDEA Internacional (NIMID), con estudios de caso recogidos en el libro “Redes Ilícitas y Política en América Latina” (2015) donde se habla de los nexos entre el crimen organizado y la política. La Convención de Palermo (2002) se refiere al crimen organizado como “grupo delictivo organizado de tres o más personas, de carácter más o menos permanente que actúe concertadamente para cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en la Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material”.

El estudio prefiere el concepto de redes ilícitas al considerar que de manera creciente el crimen organizado está involucrado en actividades que no son típicamente ilegales, pero donde se abusa sistemáticamente de la ley, por lo que había que ampliar las dimensiones de los conceptos de manera que se abarquen comportamientos no sólo criminales –penalizados en los respectivos códigos penales– e ilegales –contrarios a la legislación del país, la cual incluye normas administrativas y ambientales–, sino también ilícitos –contrarios a la ley y otras normas– así como estructuras criminales en forma de red, donde los acuerdos que median entre sus miembros –algunos insertos en los aparatos estatales– pueden aparecer como informales.

01 EDITORIAL

El estado anómico y la seguridad con enfoque en la convivencia social
Bertha García

03 ARTÍCULO

Redes ilícitas en América Latina
Catalina Uribe Burcher

06 ARTÍCULO

Inteligencia: Una piedra en el zapato para la democracia uruguaya
Nicolás Álvarez

10 REPORTAJE

La juventud: población vulnerable frente a la violencia e inseguridad
Susana Espinosa Soto

15 CRONOLOGÍA:

Noticias
junio 2015 –
septiembre 2015

19

Modificación de Tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas del CONSEP

El artículo de Nicolás Álvarez sobre las dificultades observadas en la configuración de estructuras estatales apropiadas para el manejo y control democrático de las actividades de Inteligencia (tema al que hemos dedicado los últimos Boletines), demuestra que aún en los países considerados más democráticos de la región latinoamericana como lo es el caso de Uruguay, éstas se mantienen como el subconjunto más problemático del estado y continúa siendo un área sin posibilidades reales de control democrático.

Por último, con en el reportaje sobre la Juventud y el consumo de drogas, hemos querido introducir el tema con un referente de seguridad algo distinto de las problemáticas más recurrentes, porque toca directamente el tema de la convivencia social también uno de los nuevos enfoques que vienen como aportes de la sociología.

El tema puede ilustrarse con la angustia de padres de familia que esperan la resolución de un juez, el muchacho (consumidor, de 21 años, tres meses en la cárcel luego de salir de una clínica de rehabilitación) puede esperar la extinción de la acción penal, o enfrentarse a una sentencia entre tres meses y 6 años de prisión. En el Ecuador, la Constitución de 2008 considera al consumo de drogas como un problema de salud sacándolo del ámbito criminal. “No es lo mismo un consumidor que un traficante o un traficante en mínima escala” claman algunos especialistas en derecho penal, preocupados porque el Consep (Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) ha fijado una nueva tabla de consumo que- según las autoridades de la Judicatura especificará claramente de forma técnica entre lo que es un adicto y un traficante.

El Consep acogió en 2014 un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) que establece la tabla de cantidades máximas admisibles para la tenencia y consumo de drogas de una persona en

Ecuador en base a criterios de salubridad. Sin embargo no se han asumido otros criterios como los carcelarios u otros importantes.

En el Ecuador, no se está discutiendo si los ciudadanos en las ciudades pequeñas o grandes, se involucran en el logro de mejores condiciones de convivencia ciudadana. No hemos encontrado estudios que enfocan los problemas de grupos sociales tan importantes como la juventud a nivel de los microespacios en donde se desarrolla su vida cotidiana. No existen estudios estadísticos que señalen con especificidad los problemas de los consumidores juveniles en sus entornos vitales.

En América Latina el problema es serio. En Argentina se discuten otras respuestas como las pedagógicas -proyectos educativos de tiempo completo- que tratan de sustraen a los jóvenes de sus ámbitos familiares contaminados, donde los propios progenitores, a veces en extrema pobreza, los obligan a participar del microcomercio de drogas desde muy corta edad.

Roberto Gonzalez, especialista en seguridad de la Universidad de Villa María (Córdoba, Argentina), en un artículo periodístico “Pensar y repensar en la seguridad”, dice que estamos cometiendo errores en nuestros países al momento de diseñar y poner en marcha las políticas de seguridad. Se pierden de vista los factores ambientales que podrían generar el quiebre de la ley, entre ellos los valores y antivalores vigentes en nuestras sociedades. Se centra la atención en conseguir metas (no resultados). Nos enfocamos en la cantidad de detenidos, de vehículos controlados, kilos de droga incautada, cantidad de objetos robados. Pero se pierde de vista “la transformación que una política de seguridad debe generar, con mejor convivencia y mayor tranquilidad en la vida con el otro”.

“La inseguridad desafía el sistema de valores vigente en un grupo social. No se

trata sólo de quebrar la ley afectando la vida y la integridad de otros ciudadanos, sino que con el delito, la violencia y el crimen ponemos en discusión los valores que nos permiten o dificultan la convivencia, sobre todo en ciudades desorganizadas en nuestra Latinoamérica. La pérdida de afecto y respeto por los otros en nuestras ciudades conflictivas genera visiones contradictorias. Para romper con este error conceptual, necesitamos recuperar la capacidad de los conjuntos humanos para plantear la seguridad como una búsqueda conjunta”.

*Socióloga, profesora principal de la PUCE y Directora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa.(PUCE)

REDES ILÍCITAS EN AMÉRICA LATINA

Catalina Uribe Burcher*

1. Antecedentes

En el año 2005, Vicente Castaño Gil, uno de los principales jefes de los grupos paramilitares en Colombia, afirmó en una de las revistas de alta circulación del país, que más del 35 por ciento del Congreso colombiano estaba en ese momento conectado a sus estructuras criminales¹. Este escándalo –conocido luego como “parapolítica”– obligó a las autoridades judiciales a iniciar una de las investigaciones más significativas sobre los altos círculos de la política en el país y en la región, tan sólo comparable con las relacionadas con Vladimiro Montesinos en Perú. Más allá, este escándalo hizo que sonaran las campanas de alerta sobre un nuevo paradigma relacionado con la forma en que las redes criminales estaban operando. Esta evolución en sus *modus operandi* se centra en asegurar sus intereses –sean éstos el control de territorios, acceso a medios de transporte o impunidad por delitos, entre otros– no solamente a través de amenazas y violencia directa, sino también a través de alianzas estratégicas con el sector político. A esto se suma un afán de muchos políticos en la región por aprovechar los recursos y espacios de poder que generan estas redes ilícitas, de manera que se han abierto nuevos espacios para establecer relaciones simbióticas entre ambos actores. Esta constatación preliminar llevó a IDEA (NIMD) a emprender un proyecto de investigación de dos años de duración y a la publicación del libro “Redes Ilícitas y Política en América Latina” (2015).

2. El problema

La investigación plasmada en el libro se centró en estudiar las interrelaciones entre redes ilícitas y actores políticos y económicos en América Latina, así como las políticas y normas para combatir este fenómeno. Y si bien es cierto que se trata

de una situación que tiene antecedentes en fenómenos de vieja data, la sofisticación que han adquirido en el marco de la globalización y la flexibilización del intercambio comercial entre fronteras nacionales y regionales, hace que sus herramientas también avancen en sofisticación. Es importante resaltar que el problema del nexo entre el crimen organizado y la política no es un fenómeno exclusivo de algunos países “problemáticos”, ni de unas regiones particulares –como América Latina– o subregiones –como la región andina– que han enfrentado el problema del narcotráfico de manera más aguda. De hecho, éste es un problema global, asociado a la presencia misma de redes ilícitas, cualquiera sea su naturaleza, puesto que la corrupción política es una de las principales estrategias de estas redes para poder llevar a cabo sus actividades lucrativas.

Pero el principal problema proveniente de este enriquecimiento de pocos, viene a costa del desmedro de la legitimidad y capacidad de la política y del Estado, entendiendo esto como la “aceptación popular de la autoridad política” que se ve afectada en tanto los ciudadanos ven cada día con más escepticismo a los políticos, a los partidos y a la política en general. Cabe destacar que según el Barómetro de Corrupción de Transparencia Internacional de 2013, alrededor del mundo los partidos políticos eran las instituciones consideradas más corruptas en sus respectivos países². El problema no radica sólo en las percepciones. Esta corrupción también erosiona el núcleo mismo del Estado de derecho, puesto que afecta la capacidad del Estado para proveer servicios básicos, particularmente seguridad y control de la criminalidad. La preocupación por esta amenaza a la gobernabilidad democrática y la necesidad de mejorar los mecanismos para enfrentar este peli-

gro motivaron a IDEA Internacional, al NIMD y a Clingendael a embarcarse en el mencionado proceso de investigación y elaboración del libro.

Se realizaron análisis detallados sobre cada país estudiado –Colombia, Perú, Ecuador y Guatemala–. El estudio también incluyó Honduras, pero por razones de seguridad de sus autores, los mismos no pudieron incluirse en la publicación final. En cada capítulo nacional, los estudios de caso exploraron el tejido de las relaciones entre la criminalidad y la política, con perspectivas distintas e información diversa, por la cantidad y tipo de información disponible y la especialización de los autores de cada caso. Algunos de los estudios ponen más énfasis en los detalles específicos del caso mismo, mientras que otros se centran en el contexto criminal y político que dio pie a las relaciones. Además, los casos no están necesariamente conectados de manera directa.

Los investigadores participantes partieron de conceptos básicos, pero su intención no era enfrascarse en el debate sobre ellos. “Captura estatal” es un concepto aceptado en la literatura científica sobre el tema³, pero en el estudio se prefirió hablar del nexo entre crimen organizado y la política ya que “captura del Estado” podía llevar a sobre-simplificar un fenómeno que no necesariamente implica la infiltración del crimen organizado al sector político, sino comúnmente alianzas con beneficio mutuo, algunos de los cuales vienen por iniciativa de los propios actores estatales. Crimen organizado es el término más comúnmente utilizado para referirse a los actores que hacen parte de este fenómeno, a partir de la definición que ofrece la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNODC) de 2000, mejor conocida como Convención

de Palermo, la cual habla de un grupo delictivo organizado “de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en la Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material”. Sin embargo, esta definición no ha escapado de la polémica⁴, dado que a la hora de identificar estos grupos algunos ponen énfasis en la actividad que desarrollan, la cual debe ser típicamente ilegal, mientras otros se concentran en el acuerdo entre los individuos que componen las redes grupo.

De manera creciente el crimen organizado está involucrado en actividades que no son típicamente ilegales, pero donde se abusa sistemáticamente de la ley, por lo que había que ampliar las dimensiones de los conceptos. Un ejemplo de ello es el negocio de la recolección de basura. En Italia, la Camorra, una de las redes ilícitas más poderosas del país con fuerte presencia en Nápoles, ha estado involucrada en este negocio, que en sí mismo es lícito. Sin embargo, emplea tácticas ilícitas de acoso a los competidores y extorsión para asegurarse el monopolio del campo. Las estructuras del crimen organizado son cada vez más informales y horizontales, lo que dificulta su identificación. Por ello, se prefirió hacer referencia a “redes ilícitas”, de manera que se abarquen comportamientos no sólo criminales –penalizados en los respectivos códigos penales– e ilegales –contrarios a la legislación del país, la cual incluye normas administrativas y ambientales–, sino también ilícitos –contrarios a la ley y otras normas– así como estructuras criminales en forma de red, donde los acuerdos que median entre sus miembros pueden ser informales.

3. Argumentos de transversalidad

A lo largo del proyecto se identificaron argumentos transversales e interdisciplinarios. Una perspectiva de economía política sugiere la influencia de nuevos incentivos económicos que han abierto

oportunidades para las actividades criminales en la región –como la transformación de algunas zonas geográficas y la integración con cadenas de comercio ilícito internacional–; los vectores económicos que han alienado a una parte de la población y han contribuido al contexto de crimen y corrupción; y la reconfiguración de la actividad criminal en América Latina, la cual se ha transformado de estructuras en forma de grupos verticales a redes horizontales. Estos elementos pintan un panorama que contrasta con la respuesta por parte de la fuerza pública que, en términos generales, se caracteriza por su escasa capacidad y su excesiva centralización en estrategias militares y control a delincuentes menores, a costo de descuidar el combate contra las estructuras criminales que sostienen el mercado ilícito.

En segundo lugar, en términos de las relaciones entre redes ilícitas y políticos, se identificaron siete características de carácter general, histórico, geoestratégico, político institucional y económico. Entre las características generales están: (a) la complejidad de gobernar con el crimen organizado y los diversos efectos nocivos que ello genera, particularmente en Estados frágiles. La magnitud del problema planteado contrasta con el escaso entendimiento del tema –el cual generalmente se limita a reportes aislados de periodistas investigativos–, por lo cual las medidas legales y políticas generales adoptadas para enfrentar este problema son escasas y limitadas sobre todo a combatir la corrupción política, sin tomar en cuenta las características particulares del crimen organizado, y (b) la naturaleza de los acuerdos –tácitos y explícitos– que median las relaciones entre actores políticos y criminales. En este punto, el rol de la sociedad civil y de los órganos de control del Estado es especialmente importante, ya que el rechazo o la aceptación social, así como la capacidad de los órganos de control para monitorear el comportamiento de los políticos, tiene

un fuerte impacto en la prevención de estas relaciones.

Una característica histórica (c) informa sobre los momentos de quiebre en la formación del Estado, tanto en regímenes autoritarios como en regímenes participativos, en los cuales se produjo una concentración de poder en unas pocas élites, lo cual facilitó que éstas saltaran constantemente entre los espacios políticos y económicos.

Una característica geoestratégica (d) señala la identificación de los puntos vulnerables para la creación de estas relaciones; en este caso el nivel local donde se ubican los intereses para las actividades criminales –como puertos, fronteras o pequeños centros empresariales–.

Dos características político-institucionales: (e) la creciente fragmentación de los partidos políticos en la región, que los ha hecho porosos a las influencias ilícitas, a la vez que ha dificultado la capacidad de veeduría que estas instituciones realizan frente a candidatos y actores políticos con posibles conexiones con el mundo criminal. Los problemas generados por esta fragmentación partidaria, además, se agudizan con los vacíos y debilidades en las normas sobre financiamiento político y, más importante aún, la aplicación de las mismas. La politización y modernización del aparato burocrático del Estado (f) ocurre por dos factores: la tendencia de los políticos regionales a distribuir puestos burocráticos entre sus redes informales de influencia, lo cual, además de garantizar su poder en los diferentes niveles de la administración pública, también la permea a los posibles intereses –lícitos e ilícitos– de estos políticos y las relaciones entre funcionarios públicos e intereses empresariales. Ello hace necesario que las normas que regulan los procesos de contratación y licitación públicas, así como el sistema de nombramiento y promoción de ser-

vidores públicos, se afinen y apliquen efectivamente. Por último, una característica económica es referida a (g) la práctica de lavado de dinero y cómo ésta ha evolucionado con la participación de actores políticos en negocios ilícitos, por lo cual, fortalecer las herramientas que regulan las actividades de las personas expuestas políticamente (PEP) es de creciente urgencia.

4. Conclusiones

La región ha sufrido de manera significativa la presencia de redes ilícitas. Este fenómeno se ha servido de lo que algunos denominan “espacios de oportunidades para la actividad ilícita en América Latina”. Entre los incentivos económicos y sociales se puede considerar la transformación de zonas geográficas caracterizadas por prácticas institucionales y sociales donde predomina un respeto reducido por la legalidad, además de la informalidad, el liderazgo coercitivo y el individualismo exacerbado. Otro incentivo ha sido la integración cada vez más profunda y diversificada con cadenas de comercio ilícito internacional —muchas veces paralelas o sustitutivas de sectores de exportación tradicional que en su momento entraron en decadencia.

La región ha gozado de un crecimiento económico vertiginoso y continuo desde el año 2004, que ha generado una serie de efectos, como la ascensión de un número significativo de personas a la clase media y la disminución de la inequidad, aunque ello no ha estado libre de obstáculos y limitaciones, sin mencionar la percepción social, marcada por experiencias de segmentación y diferenciación clasista o étnica. Estos procesos también han producido múltiples efectos en la evolución de las redes ilícitas en América Latina. Por una parte, no se

observa una correlación entre el crecimiento económico y la estabilidad institucional, probablemente porque este crecimiento ha estado mediado por el auge de las industrias extractivas, acompañados por la influencia de poderosos grupos de interés. Por otra, el crecimiento económico también ha dejado a una porción de la población por fuera de este auge, alimentando así aspiraciones materialistas que, en algunos casos, sólo pueden alcanzarse en el corto plazo por medio del delito o la corrupción, a través de lo que algunos analistas explican como “delito aspiracional”.

El crimen organizado en América Latina se ha transformado: ha pasado de estar caracterizado por una configuración de grupos u organizaciones monopolísticas, a convertirse de manera creciente en un entramado de redes horizontales sin integración vertical de toda la cadena de producción y distribución. En efecto, las organizaciones criminales han pasado por un proceso vertiginoso de fragmentación y diversificación, generando nuevas redes de actividad criminal compuestas por proveedores especializados que se reúnen para llevar a cabo operaciones particulares. Éstas, por su tamaño y sus diversas conexiones, pueden aprovechar rápidamente nuevas oportunidades.

La presencia de redes ilícitas ha puesto de relieve en América Latina la complejidad que supone el gobernar con el crimen organizado (convivir), esto es, aplicar proyectos democráticos en los países y localidades donde las mismas operan. Aunque muchas de estas relaciones vienen mediadas por intereses económicos comunes entre criminales y políticos, quienes trabajan de la mano a través de las redes ilícitas, no se puede dejar de reconocer la complejidad que supo-

ne gobernar en un contexto de poder híbrido y violento con fuerte presencia del crimen organizado. Muchos gobernantes que resisten estas influencias corren peligros evidentes, frente a lo cual muchos han decidido entablar “tratos de convivencia” con actores ilícitos. Sin embargo, hay una línea muy fina que separa estos acuerdos de otros tipos de alianzas funcionales que representan un beneficio real para los políticos.

Cuando se presentan verdaderas alianzas entre el crimen organizado y la política, las redes ilícitas han logrado formar parte del *modus operandi* de organismos claves de la democracia y del Estado: notablemente los partidos políticos, las agencias tributarias, los sistemas judiciales y las fuerzas policíacas, entre otros, como producto del legado de Estados históricamente autoritarios o cómplices con la criminalidad y de ciertos cambios estructurales o modernizantes dentro del Estado. Otro elemento compartido por varios países de la región es que, a pesar de los numerosos esfuerzos de combate, estos fenómenos parecen cada vez más normalizados dentro de importantes sectores de poder político y económico, así como dentro de las concepciones populares.

Los efectos que ello produce para el desarrollo y la representación política son diversos de acuerdo al lugar en el que se presentan. Estos efectos van desde resquebrajar o usurpar al Estado de su control territorial, hasta un impacto más difuso sobre la cultura política y empresarial en un lugar determinado. La situación es especialmente preocupante en el caso de Estados frágiles, donde las relaciones entre redes ilícitas e instituciones estatales ponen en especial peligro la estabilidad y la integridad territorial. Otros efectos mediatos que ello oca-

siona son las reducidas posibilidades de participación política de grupos y comunidades minoritarias y marginalizadas, incluyendo a las mujeres. Usualmente las redes ilícitas se benefician del mantenimiento del *status quo*, por lo cual las estructuras de poder consolidadas se refuerzan, dejando así poco espacio para la partición de otros grupos que estén fuera de la élite tradicional. En los casos donde algunos grupos marginados han logrado alcanzar un estatus reconocido de representación, el crimen organizado ha logrado adaptarse y forjar alianzas con éstos, de manera que los mismos dejan de servir a los intereses de los ciudadanos que representan y, en cambio, quedan al servicio de los intereses ilícitos.

Las relaciones entre criminales y políticos no son siempre el resultado de un pacto o arreglo explícito o intercambio entre el poder público y el criminal. Los beneficios mutuos pueden resultar de una convivencia puramente tácita y tolerante, con cierta distancia entre las partes; esto es lo que algunos denominan “permisividad lucrada”. Otras relaciones sí son más explícitas y estrechas, particularmente en los casos en los cuales participen intermediarios. En particular, es interesante observar las diferencias cuando se trata de países que han pasado por regímenes autoritarios y los que no. En el primer caso, como en Perú y Guatemala, cuando tales regímenes han mantenido vínculos

orgánicos o “estratégicos” con redes ilícitas, su posterior transición democrática hacia modelos de gobierno más descentralizados y dispersos no ha logrado barrer con estos elementos residuales del *status quo* ex ante. En el segundo caso, en países que no han sufrido este arquetipo histórico de criminalidad coordinada por el poder central, como Ecuador y Colombia, otros factores han favorecido las relaciones entre criminales y políticos, como procesos de conflicto armado interno, inestabilidad económica y fragmentación partidista. Todos estos casos comparten el hecho de que durante los procesos de confirmación y consolidación estatal —independientemente de que éstos hubieran estado basados en regímenes autoritarios o no— se crearon los cimientos para las relaciones entre políticos y criminales a partir de la concentración de poder en unas pocas élites.

Es particularmente interesante observar que los puntos más vulnerables están en las conexiones locales. Las redes ilícitas, a pesar de tener un alcance transnacional, tienen sus puntos de operación en municipios donde se ubican intereses claves para la actividad criminal de que se trate, sean éstos puertos para el transporte de drogas o dinero, fronteras para el intercambio de contrabando, o centros mineros o ciudades con empresas de pequeña o mediana escala a través de las cuales se lava dinero. Cabe resaltar que éstos son intereses

puramente económicos y cada vez se observan menos conexiones mediadas por objetivos ideológicos.

*Catalina Uribe Burcher, Abogada colombiana. Oficial de programas sobre democracia, conflictos y seguridad de IDEA Internacional. Este artículo recoge un resumen de textos de su directa autoría publicados en Ivan Briscoe, Catalina Perdomo, Catalina Uribe Burcher (2015) *Redes Ilícitas Y Política en América Latina*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) and Netherlands Institute of International Relations Clingendael, disponible en <http://www.idea.int/publications/illicit-networks-and-politics-in-latin-america/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=65530>

Notas:

1. Revista Semana (2005), “Habla Vicente Castaño”, Revista Semana, 5 de junio de 2005, disponible en <<http://www.semana.com/portada/articulo/habla-vicente-castano/72964-3>>, fecha de consulta: 7 de febrero de 2014
2. Transparencia Internacional (2013), *Global Corruption Barometer 2013: Report [Barómetro de Corrupción Global 2013: Informe]* (Berlín: Transparencia Internacional, 2013), disponible en inglés en <<http://www.transparency.org/gcb2013/report>>, fecha de consulta: 19 de febrero de 2014
3. Philp, M., *Corruption and State Capture: An Analytical Framework [Corrupción y Captura del Estado: Un marco analítico]* (Oxford: Departamento de Política y Relaciones Internacionales, Universidad de Oxford, 2001), disponible en inglés en <http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/1740479-1149112210081/2604389-1149265288691/2612469-1149265301559/prague_corrupt_capture.pdf>, fecha de consulta: 10 de febrero de 2014
4. Resa Nestares, C., *Crimen Organizado Transnacional: Definición, causas y consecuencias*, (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2001), disponible en <http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html>, fecha de consulta: 1 de marzo de 2013

INTELIGENCIA: UNA PIEDRA EN EL ZAPATO PARA LA DEMOCRACIA URUGUAYA

Nicolás Álvarez*

1. El particular caso uruguayo

Históricamente, Uruguay ha sido considerado uno de los países más democráticos de la región. Durante

el siglo XX, solo en una oportunidad sus Fuerzas Armadas (FFAA) participaron activamente en un golpe de Estado¹ sustituyendo a los

partidos políticos en el control del aparato estatal². En la actualidad, contexto en el que se celebran 30 años ininterrumpidos de estabili-

dad democrática (1985-2015), las principales instituciones calificadoras³ continúan ubicando al país dentro de los más democráticos de América Latina junto con Chile y Costa Rica.

El principal rasgo de su modelo de relaciones civiles-militares, durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI, ha sido la subordinación militar a las autoridades democráticamente electas (González, 2013)⁴. Asimismo, con el ingreso de la izquierda uruguaya al gobierno nacional en el año 2005 y la posterior aprobación de la Ley Marco de Defensa Nacional (N° 18.860) durante el año 2010, se introdujeron disposiciones inéditas que refuerzan aún más la dirección civil de las políticas públicas de defensa (Alvarez, 2014).

A pesar de estos aspectos, que podríamos caracterizar como positivos, la inteligencia, considerada aquí como el subconjunto más problemático de las relaciones civiles-militares (Bruneau y Dombroski, 2004), ha sido una de las áreas sobre las que menos se ha trabajado luego de la restauración democrática. Los intentos reformistas vertidos desde el año 1985 hasta el año 2010, no solo no han sido efectivos, sino que en muchos casos reprodujeron los círculos viciosos que tuvieron su punto crítico durante la dictadura cívico-militar (1973-1984). Recién a partir del año 2011, con la creación de la Comisión Especial con fines de asesoramiento en Inteligencia de Estado del Parlamento uruguayo (CEI, en adelante), el sistema político realizó el primer intento serio por generar un verdadero Sistema de Inteligencia Nacional, lograr la adecuada coordinación entre los organismos encargados de la tarea y tener po-

sibilidades reales de control democrático (Álvarez, 2015)⁵.

En términos comparados, el rezago de Uruguay, con respecto a sus vecinos más cercanos, puede medirse en décadas. El primer marco legal de carácter público en materia de inteligencia, fue aprobado en Brasil en el año 1999, Argentina, otro de los casos pioneros en la región, aprobó su Ley de Inteligencia Nacional en el año 2001 y tres años más tarde, el Estado chileno estableció su Sistema de Inteligencia de Estado. Desde ese momento en adelante, gran parte de los países de la región han aprobado leyes nacionales en materia de inteligencia, perfilándose como actores centrales de una segunda ola de reformas normativas.

En el contexto latinoamericano, Uruguay puede ser considerado un caso atípico. Por un lado, es presentado como un país ejemplar en términos de estabilidad institucional, sin embargo, no ha logrado resolver un área sensible para su democracia. En segundo lugar, y reforzando aún más esta tesis, pese a no contar con mecanismos de control democrático explícitos en la materia, no ha sufrido, como en los demás países de la región⁶, una injerencia comprobable de sus agencias de inteligencia en la vida política del país durante el último ciclo democrático.

2. Una historia de (des)control (1947-2010)

Al igual que en los demás países de la región, el lapso histórico al que podríamos denominar como fundacional), en términos de la creación de las primeras estructuras formales de inteligencia, se remonta al periodo de postguerra, específicamente durante la Guerra Fría (1945-

1989/91). En septiembre del año 1947, se creó en Uruguay el Servicio de Inteligencia y Enlace (SIE) de la Policía de Montevideo, siendo esta la primera agencia de inteligencia del país. A nivel militar, en el año 1965 se creó el Servicio de Información de la Defensa (SID), como un órgano conjunto de inteligencia militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Posteriormente, la Ley orgánica militar (N° 14.157) promulgada por la dictadura cívico-militar, lo coloca bajo la órbita de la Junta de Comandantes en Jefe, organismo creado en septiembre del año 1971. Durante el mismo año, nuevamente a nivel policial, se crea la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), dependiente del Ministerio del Interior.

Pese a no tener objetivos claramente definidos y competencias debidamente establecidas, estas agencias, producto de la reorganización política internacional de postguerra, tuvieron como cometido principal la “contención del comunismo”. En este contexto, el poder político cedió a las agencias de inteligencia amplias potestades de seguridad interior, incrementando de esta manera el proceso de autonomización de los servicios. Esta visión de “policía política”, tendría su auge durante el periodo dictatorial.

Durante la dictadura cívico-militar, más específicamente en el año 1975, el SID es denominado Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (SIFFA). El aparato de inteligencia policial cumplió un rol importante en la represión, pese a su subordinación a la inteligencia militar. Durante el periodo, el control sobre el aparato estatal y la sociedad civil fue total y represivo. No solo se clasificó a cada residente del país en categorías, según su “pe-

ligrosidad” para el proyecto político castrense, sino que el aparato de inteligencia recabó información de diferentes instituciones sociales, deportivas y educativas del país, teniendo oficiales con fines de enlace en cada una de las dependencias estatales.

Otro punto a destacar sobre el período de facto, es la coordinación entre las fuerzas represivas uruguayas y la coordinación con aparatos represivos de la región. Durante el período se creó el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCA) integrado por fuerzas policiales y militares bajo las directivas del SIFFA en operaciones de inteligencia, asimismo, Uruguay, en conjunto con Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay emprendieron, en el marco del Plan Cóndor, acciones de inteligencia conjunta contra grupos definidos como “subversivos” (Rico, 2007; Mcsherry, 2005)⁷.

Con la vuelta a la democracia, en el año 1985, las estructuras del pasado quedaron intactas y el gobierno triunfante, dispuso, a través de la Ley N° 15.848 –por la cual los militares negociaron su salida del Estado– que el SIFFA, pasaría a denominarse Dirección General de Información de Defensa (DGID) y dependería directamente del Ministerio de Defensa Nacional. Entrada la década de los 90, el gobierno triunfante, no fue profundo en abordar el tema de la defensa y la inteligencia no fue una prioridad. Por Ley de presupuesto 1990-94 el gobierno encomendó a las FFAA “las misiones de seguridad interior y mantenimiento del orden público” logrando exacerbar una función que las FFAA cumplieron en su etapa represiva.

Con un nuevo gobierno, el tema inteligencia se instaló en la agen-

da política durante el período 1995-2000. En diciembre del año 1999, a escasos meses de culminar su mandato, el Presidente Sanguinetti transformó, por decreto N° 405/99, la DGID agencia producto de la Ley 15.848, en la actual Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (DINACIE). La legalidad del decreto por sobre la ley, junto con el escaso margen para la reacción parlamentaria, dieron un tono polémico a la discusión del nuevo organismo (González, J 2007)⁸. Culminado el gobierno del Dr. Sanguinetti y apenas entrado el gobierno del Dr. Jorge Batlle (2000-2005), el atentado terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, tuvo sus principales repercusiones para la inteligencia uruguaya. Continuando con la línea de sus antecesores, las medidas adoptadas no fijan su atención en el control sobre el organismo, en tanto la principal medida adoptada, en octubre del año 2001, fue la de otorgar a la DINACIE la responsabilidad de conducir las actividades de inteligencia sobre el terrorismo en el territorio nacional⁹.

Durante la primera administración de izquierda en Uruguay, que llevó a la presidencia al Dr. Tabaré Vázquez (2005-2010), se creó, mediante la ley N° 17.930, el cargo de Coordinador de los Servicios de Inteligencia de Estado. El mismo se declaró de particular confianza y se instaló en la órbita de Presidencia de la República, además no fue ocupado durante la administración Vázquez. El cargo fue presentado como una figura de transición. Sin embargo, debido a diversos cuestionamientos y a la escasa precisión en lo que tiene que ver con competencias, limitaciones y recursos que se destinan al Coordinador, fue ocupado y regla-

mentado durante la gestión del Sr. Mujica en el año 2010.

3. Un quinquenio alentador (2010-2015)

A pesar de las polémicas surgidas debido al alejamiento del Coordinador de los Servicios de Inteligencia en circunstancias que aún no están claras y a la compra secreta por parte del Ministerio del Interior de un sistema para la interceptación de comunicaciones conocido como “El Guardián” –ambos sucesos ocurridos durante el año 2013– el quinquenio 2010-2015 ha sido alentador en términos de la creación de una institucionalidad de inteligencia en el país. En el mes de noviembre del año 2011, en reunión de ambas cámaras y por unanimidad, el Parlamento uruguayo creó la CEI que nucleó a representantes de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria. Dicha comisión comenzó a sesionar ese mismo año. Durante el 2011, sesionó en 2 oportunidades, siendo la sesión más importante el 19 de diciembre, en la cual se recibió al Coordinador de los Servicios de Inteligencia con el objetivo de poner en conocimiento el pensamiento y eventuales propuestas respecto a dotar al país de un marco legal en materia de inteligencia.

Durante el año 2012, tres de los cuatro partidos políticos presentes en la comisión presentaron propuestas para crear un marco normativo para las actividades de inteligencia, además, el Poder Ejecutivo también tuvo la oportunidad de remitir su propio proyecto. Este año la Comisión se reunió en 8 oportunidades, destacándose las sesiones en las que participaron expertos extranjeros¹⁰ y la sesión que dio como resultado

la creación de un “grupo de redacción”. El grupo de redacción comenzó su actuación el 23 de julio de 2012, y en el mes de diciembre del año 2013 dio por terminada su actividad. Finalmente, en el año 2014, se presentó, ante la Asamblea General, el informe final de la CEI – que contiene el proyecto de reforma acordado por el sistema político– y en septiembre del mismo año fue ratificado por unanimidad.

Las características más significativas de este largo proceso de negociación pueden resumirse en tres grandes ejes: (i) la presencia de intereses compartidos por el sistema político en materia de inteligencia; ii) la presencia de diversas opciones de reforma que se encuentran dentro de una zona potencial de acuerdo; y iii) la legitimidad otorgada al proceso debido a la selección de criterios de reforma de mutuo acuerdo. Finalmente, en lo que respecta al Anteproyecto de Ley, titulado “Sistema Nacional de Inteligencia”, este se compone de 6 Títulos, y 41 artículos. En términos de institucionalidad, el proyecto crea la Secretaría de Inteligencia de Estado, como un órgano desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo, cuya misión será producir Inteligencia Estratégica de Estado para asesorarlo. La misma, estará a cargo del Director Nacional de Asuntos Estratégicos, figura que sustituye al cuestionado cargo de Coordinador, y dirige la Mesa Coordinadora de Inteligencia, que integran los organismos de inteligencia del Estado.

En términos de contralor, el proyecto estipula mecanismos de control interno, así como de control externo. Con respecto a estos últimos el proyecto faculta a la Asamblea General a crear una comisión parlamentaria

bicameral de control y supervisión en la que se encontraran representados todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Por último, dentro de las disposiciones transitorias, el proyecto elimina el cargo de Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado disponiendo el pasaje de los créditos y bienes de cualquier naturaleza a la Secretaría de Inteligencia y se deja constancia de que la atribuciones en materia de Inteligencia Estratégica de Estado de la DINACIE, serán desempeñadas por la misma Secretaría, quedando a cargo del Ministerio de Defensa los aspectos relativos a la inteligencia militar.

4. Seguridad, defensa e inteligencia: cuentas pendientes y estado de situación actual

El 1º de marzo del presente año se inició en Uruguay un nuevo periodo de gobierno. Tras la culminación de un largo calendario electoral, en noviembre del año 2014, el Partido Frente Amplio resultó triunfador en la segunda vuelta electoral, lo que le valió un tercer periodo de gobierno consecutivo. El Presidente electo decidió mantener en su cargo a los Ministros de Interior y Defensa, quienes ya habían ocupado las respectivas carteras en la administración anterior.

Durante los primeros meses de gobierno, ambos ministros han sido duramente cuestionados por los miembros de la oposición y en el caso del Ministro de Defensa Nacional, también desde su fuerza política y diversas organizaciones sociales. Asimismo, en este breve lapso, ambos Ministros se han visto obligados a asistir al Parlamento a dar explicaciones por diversos sucesos. En esta oportunidad nos

detendremos específicamente en los temas relativos a la inteligencia. Como adelantara anteriormente, en el año 2013, cuando a nivel internacional se discutía sobre las consecuencias del espionaje en internet –luego de ocurrido el caso Snowden (ex agente que reveló espionaje ilegal del gobierno de los EEUU)– y a nivel doméstico la CEI preparaba el Proyecto de Ley para crear el Sistema Nacional de Inteligencia en Uruguay, el Ministerio del Interior adquiría en forma secreta el sistema Guardiao WEB -utilizado en la actualidad por la Policía Nacional de Brasil- para la interceptación de comunicaciones lo cual incluye “By NGC con 30 accesos simultáneos, 800 celulares, 200 fijos, espejo de 100 suscripciones de e-mails y monitoreo de 3 medias sociales”.

En su momento esto generó malestar para ambas partes, por un lado para el gobierno, por la filtración de la información y en la oposición por el secreto en el que se había amparado el Ministerio para realizar una compra directa por un valor estimado de 2.000.000 millones de dólares. En el año 2015, a 6 días de iniciado el nuevo gobierno, el Ministerio del Interior anunció que este sistema se pondría operativo. En medio de cuestionamientos, la cartera del Interior se vio envuelta en nuevos problemas. Por un lado, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó ante la Justicia un recurso contra el Ministerio del Interior por negarse a brindar información (por Ley de Acceso a la Información Pública Nº 18.381) sobre el sistema informático adquirido en el año 2013. Finalmente la Justicia falló a favor del Ministerio por entender que se trata de “información reservada”, y este tiene la posibilidad de ampararse en ella.

Finalmente, el día 30 de junio del presente año el Ministro del Interior fue convocado a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado para brindar información sobre la puesta en práctica del dispositivo electrónico de interceptación de comunicaciones. La paradoja al problema es sencilla, mientras la seguridad es percibida como el principal problema de la sociedad Uruguaya las instituciones encargadas de esta y los mecanismos utilizados, generan temor. Si bien, los sistemas de interceptación, son herramientas imprescindibles para el combate al delito, por el momento, Uruguay no cuenta con un marco legal en materia de inteligencia que garantice la eficiencia en la utilización de estos dispositivos. Quizá, este escenario de debate acelere el lento proceso de discusión y el país logre saldar, a través de la aprobación de un marco legal garantista, esta cuenta pendiente para la democracia uruguaya.

*Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay.

Notas:

1. Durante el siglo XX, Uruguay sufrió tres quiebres institucionales. En el año 1933, el Presidente electo Gabriel Terra (1931-1933) se proclamó, con ayuda del cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional, Presidente de facto para el periodo 1933-1934. En el año 1942, Alfredo Baldomir encabezó el llamado “golpe bueno” que condujo al restablecimiento de las instituciones democráticas. Solo durante el golpe de Estado del año 1973, las FFAA participaron activamente del mismo y se hicieron con el poder.
2. Se pueden consultar los índices de democracia que producen: Corporación Latinobarómetro (www.latinobarometro.org) Polity Project (www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm) y Freedom House (www.freedomhouse.org)
3. González, J. (2013). “Relaciones civil-militares en Uruguay en su contexto: La perdurabilidad del control político civil en América Latina” en Pion Berlín, D. y Ugarte, J.M, Organización de la Defensa y Control Civil de las Fuerzas Armadas en América Latina, Jorge Baudino Ediciones, Buenos Aires.
4. El Ministerio de Defensa Nacional promovió en el año 2006, el llamado “Debate Nacional sobre Defensa” que fue la antesala de la Ley Marco de Defensa Nacional. Uno de los cambios de la Ley fue la creación de un organismo de nivel político. Mediante el art. 10 se creó el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) -reglamentado mediante un decreto en el año 2013- integrado por los ministros de defensa, interior, relaciones exteriores y economía.
5. La inteligencia estatal uruguaya está integrada en la actualidad, por diversos organismos. Un primer conjunto, se encuentra integrado por la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE) dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y la Direc-

ción Nacional de Información e Inteligencia (DNII), dependiente del Ministerio del Interior. Un segundo conjunto, está compuesto por diversas agencias dependientes de otras carteras ministeriales y organismos públicos, a saber: departamento II de los Estados Mayores del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura Nacional Naval, el servicio de Información Exterior de la Cancillería, la inteligencia financiera del Banco Central y la Dirección Nacional de Aduanas.

6. Para un análisis sobre los sucesos recientes en materia de inteligencia en América Latina ver: “Servicios de Inteligencia vs. Democracia”. Boletín Democracia, Seguridad y Defensa. N°63, 2015. PUCE.
7. Mcsherry, P (2005). “Documento descalificado de la CIA revela reunión de ‘servicios’ en 1974”. Diario “La República” edición con fecha 17 de agosto. Montevideo, Uruguay.
8. González, J. (2007). Defensa Nacional y FFAA. Democracia e Integración Regional. PRISFAS – ICP – FCS, CSIC, Udelar.
9. Informe sobre las actividades terroristas presentado en Washington y sus principales repercusiones para la inteligencia uruguaya: “El terrorismo sigue en la mira”. Beck, C, 2002. Diario “El Observador”. Enero 26, págs. 8-9.
10. Se recibió, durante junio y agosto del año 2012, al Director del Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) Dr. Philipp Fluri y posteriormente a Hans-Jörg Schäper, Subdirector de la Cancillería Federal de Alemania y Coordinador de los Servicios Federales de Inteligencia, acompañado por Robert Kappeler de la Embajada de Alemania en Buenos Aires.

REPORTAJE: LA JUVENTUD: POBLACIÓN VULNERABLE FRENTE A LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD

Susana Espinosa Soto*

La problemática de la seguridad a nivel urbano ha tomado distintas formas y afectado de manera desigual a diversos grupos poblacionales. Uno de ellos, sin duda, es la juventud. Esta categoría, que implica una serie de simbolismos y distinciones

etarias ha sido en primer lugar víctima de las dinámicas de violencia, para, posteriormente, pasar a ser victimarios de sí mismos. Las redes ilícitas se han encargado de integrar esta población a su funcionamiento, asegurándose oferta y demanda, de

drogas, armas y otros negocios por fuera de la ley. El impacto en la juventud ha sido medido desde varias perspectivas –que serán tratadas en este reportaje–. No obstante, el estudio de la juventud como población vulnerable ante la escalada de vio-

lencia e inseguridad, todavía debe ser profundizado desde las Ciencias Sociales.

El concepto de juventud tiene su origen en el pensamiento social de inicios del siglo XX¹. En el momento histórico en que la sociedad urbana plantea nuevas demandas a los individuos (trabajo infantil y femenino, formación diferenciada), surgen nuevas categorías sociales. Es entonces cuando se diferencia a la juventud como colectividad social a proteger.

Esta categoría nace de las clases medias reproducidas socialmente a través del sistema escolar², y simbólicamente, la juventud se establece como el futuro de la sociedad, en el espacio de proyección de los mitos sobre el cambio social. Pero, en cuanto a las condi-

ciones materiales de la vida social, la juventud se instala, después de la Segunda Guerra Mundial, como un mercado de consumo de lo que fue bautizado como 'cultura juvenil'³.

Varias corrientes de pensamiento han conceptualizado a la juventud. Operativamente, se utiliza el término para explicar la transición entre niñez y adultez, a través de la adquisición progresiva de responsabilidades del mundo adulto. Otros consideran a la juventud como un proceso de emancipación que concluye cuando se logra la independencia económica, la autoadministración de recursos, la autonomía personal y el hogar propio⁴.

Mientras que en la conceptualización teórica, pensadores como Jean-Jacques Rousseau, José Ortega y Gasset,

Talcott Parsons y Pierre Bourdieu, entienden a la juventud en un amplio espectro: desde una transición del salvajismo a la civilización –Rousseau–, como una cultura opuesta a la adulta con su propio sistema de normas y valores –Parsons–, o hasta el motor de cambio social instaurado en un grupo etario –Ortega y Gasset–⁵. Más allá de las definiciones que han existido y seguirán generándose desde el pensamiento social, es importante entender el impacto de las condiciones de vida de esta población a través de indicadores sociales. Empezando por la percepción propia, a continuación en las Tablas N°1 y N°2, una encuesta sobre la situación socio-económica y las expectativas generacionales de los adolescentes y jóvenes del Ecuador, muestra las desventajas y ventajas de ser adolescente.

Tabla N°1

Desventajas de ser adolescente		Poca libertad, control (%)	Vulnerabilidad, experiencia (%)	No ser tomado en cuenta, desconfianza (%)	Adquirir mayores responsabilidades (%)	Ninguno (%)	Otros (%)
Ciudad	Quito	26,7	16,69	29,19	9,23	3,79	4,24
	Guayaquil	24,68	15,22	15,02	9,36	5,49	9,15
Género	Femenino	23,95	21,05	24,04	5,88	3,97	5,22
	Masculino	27,35	9,85	17,53	13,25	5,7	9,21
Nivel socio-económico	Alto/medio alto	18,49	23,96	25,48	6,89	6,33	5,11
	Medio típico	20,96	19,11	16,67	14,57	5,3	8,5
	Medio bajo	27,36	15,5	19,56	9,11	3,43	8,66
	Bajo	29,42	11,05	21,49	8,51	4,66	6,49
TOTAL		25,53	15,84	21,01	9,31	4,77	7,08

Fuente: SIISE-SIJOVEN: Encuestas sobre Situación Socioeconómica y Expectativas Generacionales de los Adolescentes y Jóvenes Ecuatorianos - DNJ

La Tabla N°1, muestra que la percepción de los jóvenes sobre sus desventajas se agrupa sobre todo en relación a la falta de libertad, especialmente en los estratos medio bajo y bajo; mientras que la desventaja de no ser tomados en cuenta es una preocupación del nivel socioeconómico alto/medio alto. La variación en las respuestas refleja que esta población no es fácilmente encasillada en un tipo de necesidades; lo que puede impactar en la generación de expectativas y necesidades no satisfechas por la sociedad.

Tabla N°2

Ventajas de ser adolescente		Libertad, diversión (%)	Futuro por delante (%)	Sociabilidad, alegría (%)	Confianza, cariño (%)	Autonomía, madurez, responsabilidad (%)	Ninguno (%)	Otros (%)
Ciudad	Quito	3,37	49,38	18,97	3,74	12,67	3,42	2,63
	Guayaquil	11,58	42,93	15,26	6,21	16,86	2,3	2,41
Género	Femenino	8,61	42,05	19,88	4,37	14,43	3,37	2,6
	Masculino	7,54	49,8	13,32	6,08	15,84	2,08	2,3
Nivel socio-económico	Alto/medio alto	7,83	43	26,08	5,86	13,05	2,09	0,78
	Medio típico	2,27	46,59	22,95	1,96	19,89	0,19	1,41
	Medio bajo	12,69	42,35	12,89	6,08	13,96	3,76	1,47
	Bajo	7,73	48,5	12,59	5,52	14,86	3,49	4,22
TOTAL		8,11	45,65	16,83	5,16	15,09	2,7	2,46
Fuente: SIISE-SIJOVEN: Encuestas sobre Situación Socioeconómica y Expectativas Generacionales de los Adolescentes y Jóvenes Ecuatorianos - DNJ								

En la Tabla N°2, se puede ver que mayoritariamente los jóvenes sienten una suerte de alivio por la sensación de tener la vida por delante (esto no es necesariamente positivo si no están acompañados por la percepción de estar adquiriendo responsabilidades, que es una marca bastante baja en la Tabla). Además, tienen la percepción de carecer de confianza y cariño por parte de familia y sociedad, un dato preocupante en una edad en que los afectos son esenciales como vínculos a la vida y a la sociedad.

El reconocimiento de la juventud como colectivo parece, en nuestros días, más una penalización que una ventaja. “La familia y no las instituciones asumen los costes que origina la etapa de transición a la edad adulta”⁶. Este factor genera una sensación ambigua para la población que ocupa esta categoría, pues al ser sujetos en transición hacia la emancipación la responsabilidad no recae exclusivamente en ellos sino que se genera una cadena de consecuencias que generan impacto social.

El elemento clave para configurar a la juventud radica, entonces, en haber finalizado o no el tránsito ha-

cía la emancipación. La promesa de libertad que circunda la sociedad actual hace que entre la definición de juventud y las condiciones reales de su existencia se establezca un espacio que hace que las expectativas construidas por los jóvenes, al no verse alcanzadas, golpeen emocionalmente a esta población y la vuelvan vulnerable a los riesgos de la sociedad.

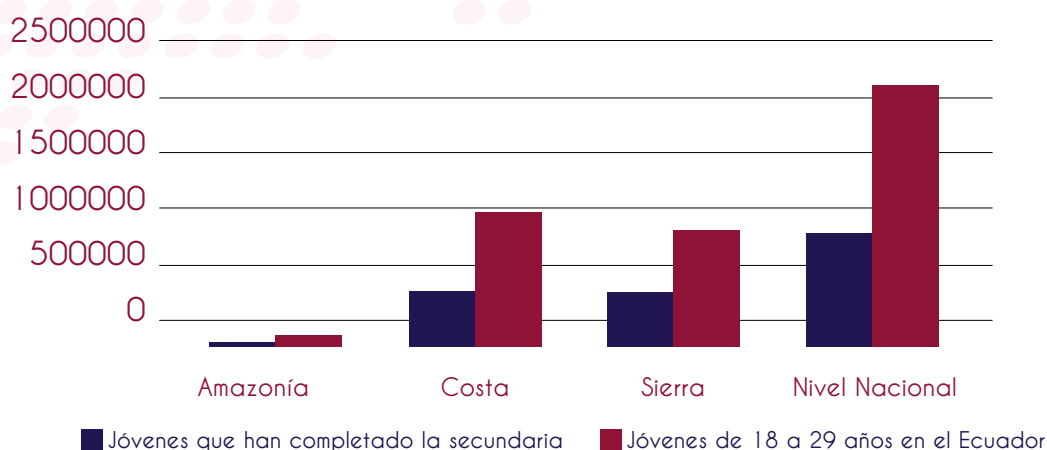
Es por eso que el Estado tiene una responsabilidad grande con respecto a la juventud. Las esferas en las que se desenvuelve un joven no han sido reconocidas como prioritarias de interés público, pero resultan trascen-

dentes en el aseguramiento de presente y futuro.

La educación, como una de las principales garantías constitucionales, ha sido identificada como una de las maneras más eficientes para prevenir que los adolescentes se involucren en redes ilícitas⁷. En el **Gráfico N°1** se muestra al grupo etario que debería haber completado la secundaria, frente a quienes en realidad lo pudieron hacer.

Las razones por las que existe un porcentaje de alrededor del 34% de jóvenes que deberían asistir a planteles educativos pero no lo hacen, están

Gráfico N°1: Jóvenes de 18 a 29 años que han completado la secundaria
(Fuente: INEC - Encuesta de condiciones de vida)



Elaborado por Susana Espinosa Soto (Programa DSD)

En la **Tabla N°3**, se presenta el porcentaje de jóvenes entre 15 y 17 años que asistían al Bachillerato en el año 2013.

Tabla N°3

JÓVENES ENTRE 15 Y 17 AÑOS: ASISTENCIA AL BACHILLETATO			
	Jóvenes de entre 15 y 17 años que asisten al Bachillerato	Porcentaje respecto al total	Población total de jóvenes entre los 15 y los 17 años
Hombres	342.431	65.9%	519.272
Mujeres	306.690	65.6%	467.173
TOTAL	649.122		986.445
Fuente: INEC- Encuesta urbana de empleo y desempleo 2013			

reflejadas en el **Gráfico N°2**. Cualquiera de las razones contempladas en este cuadro, es de competencia pública. A pesar de tener oferta pública de educación, persiste el problema de falta de recursos económicos, por ejemplo. Y una razón más grave, es la falta de interés. Si el Estado no logra garantizar que la educación no es un fin en sí mismo, sino que tiene

una importancia social, y que existen posibilidades reales para la inserción laboral posterior a la educación, es comprensible que exista falta de interés por completar un proceso educativo. Joaquim Casal dice que “las actitudes de los y las jóvenes están mediadas desde fuera, puntualizando que más que la desmotivación y la caída de interés de la juventud en

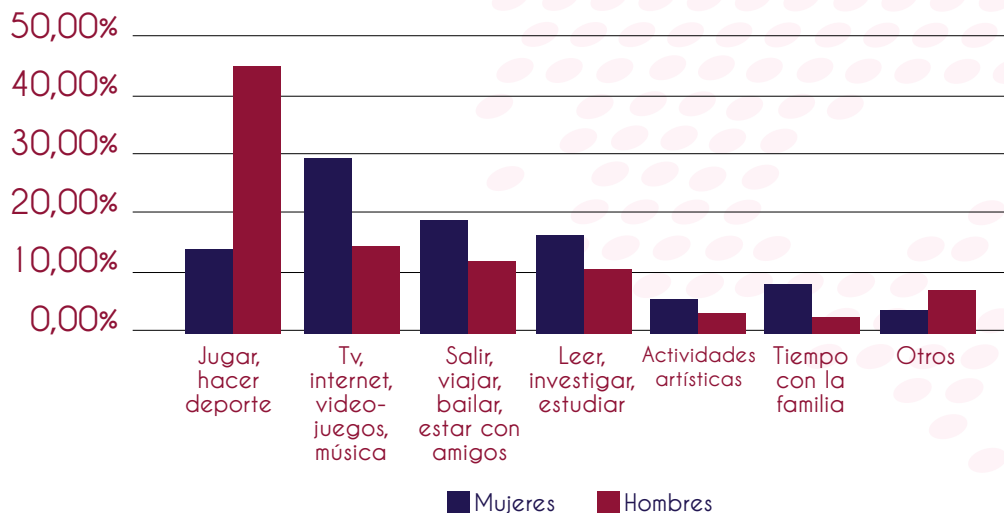
la escuela y en el trabajo, la relevancia hay que asignarla a la oferta escolar y laboral del contexto socio-económico que se les ofrece”⁸.

La administración del tiempo libre para los jóvenes es retratada en el **Gráfico N°3**. Así como la educación es fundamental para lograr que los

Gráfico No 2: Razones de no asistencia a planteles educativos
(Fuente: INEC-Encuesta urbana de empleo y desempleo 2013)



Gráfico N°3: Jóvenes entre 15 y 17 años: Uso del tiempo libre
(Fuente: SIISE-SIJOVEN, 2011)



Elaborados por Susana Espinosa Soto (Programa DSD)

jóvenes se construyan como sujetos libres, tomadores de decisiones que no afecten su presente o su futuro, la ocupación en el tiempo libre define directamente el espectro de intereses de la juventud. En función de estas actividades, se generarán sus expectativas, necesidades y demandas a la sociedad. Puede resultar más eficiente para el Estado, acercar sus políticas destinadas a la juventud, a estos espacios, en los que los jóvenes cuentan con la motivación de desenvolverse libremente, y donde sería coherente propiciar una reflexión sobre el presente y futuro de sí mismos.

Casal y otros expertos en temas de juventud afirman que el reco-

nocimiento de la juventud como población diferenciada o no del resto de la sociedad “debe venir de la mano del examen de las condiciones históricas en las que los individuos se incorporan a la vida social y de las configuraciones sociales en las que los sujetos se introducen”⁹. La juventud no se mantiene inmóvil: varían sus intereses, búsquedas y espacios de desenvolvimiento. Actualmente, la juventud se prolonga en el tiempo y sus trayectorias son más variantes, tal y como marca el contexto social. Los ritos, ciclos y fases vienen delimitados por el momento histórico y el lugar concreto en que acontecen¹⁰. Es responsabilidad pública y privada asegurar que la juventud logre continuar

caminando hacia el cambio social, evitando que antes de gozar plenamente de los derechos y libertades de la sociedad moderna, sean quienes reciben las consecuencias negativas de esta.

*Investigadora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa.

Notas:

1. Gobierno de Canarias. Consejo de Presidencia, Justicia e Igualdad. “Marco Conceptual de la Juventud” [http://www.juventudcanaria.com/opencms8/export/sites/juventudcanaria/multimedia/documentos/programas/publicaciones/encuesta_jovenes_canarias_2010/capitulos_1.pdf] (p.17)
2. Ibid. (p.17).
3. Ibid. (p.17).
4. Ibid. (p.18).
5. Ibid. (p.18).
6. Ibid. (p.19).
7. Díaz-Aguado, M.J. (2001). “Los problemas de la convivencia escolar: un enfoque práctico”. Federación de Enseñanza CCOO. Madrid. [<http://alfpa.upen.edu.pe/políticas-educativas/2004%20POLÍTICAS%20EDUCATIVAS%20para%20la%20convivencia%20escolar.pdf#page=63>] (p.15)
8. Gobierno de Canarias. Op. Cit. (p.20)
9. Ibid. (p.20)
10. Ibid. (p.21)

CRONOLOGÍA DE NOTICIAS JUNIO 2015 – SEPTIEMBRE 2015

SEGURIDAD CIUDADANA

Ecuador sale de lista de países con deficiencias para evitar lavado de activos. Según un comunicado de la Procuraduría General del Estado, Ecuador fue excluido de la clasificación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como jurisdicción con deficiencias estratégicas sobre el lavado de activos, y pasa temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de cumplimiento; reconociendo que Ecuador ha completado sustancialmente su plan de acción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a través de: 1) tipificar adecuadamente el lavado de dinero y el financiamiento terrorista; 2) establecer procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas y para el comiso de fondos relacionados al lavado de dinero; 3) fortalecer y mejorar la coordinación para la supervisión del sector financiero. *Diario El Comercio.* 25/06/2015. **El IV Congreso de Prevención de Lavado de Activos, celebrado en la ciudad de Quito, reconoció la efectividad de las leyes contra el lavado de dinero en Ecuador.** Durante el IV Congreso de Prevención de lavado de activos, desarrollado en la ciudad de Quito, Gonzalo Vila, especialista certificado en delitos financieros de Argentina, planteó que el marco legal adoptado en Ecuador es un referente regional, lo cual ha permitido que el GAFI reconozca las reformas legales y el trabajo de los entes de control en Ecuador. Para atacar el problema, además de las sanciones tipificadas en el COIP, en Ecuador trabajan coordinadamente el sector financiero privado con la Fiscalía y Aduanas del Ecuador, para detectar los capitales que quieren in-

gresar ilegalmente. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) controla todas las fronteras y aeropuertos donde verifica que ninguna persona ingrese al país con más de USD 10.000 sin declarar, y la procedencia del dinero sospechoso. *Diario El Telégrafo.* 06/07/2015.

Mafias delictivas de Perú introducen dólares falsos a Ecuador. Desde el año 2011, el sistema financiero ecuatoriano detectó USD 2,5 millones de dinero falso en transacciones bancarias locales. Las redes internacionales introducen el dinero por zonas clandestinas y pasos fronterizos ubicados en las provincias de Loja, El Oro y Guayas, al sur de Ecuador. Inteligencia detectó que en las grandes ciudades del país, los grupos criminales extranjeros comercian los dólares, según la calidad. Por ejemplo, venden USD 10.000 falsos a cambio de USD 2.500 verdaderos. Las mafias locales van a grandes bodegas de víveres o lugares informales y compran, con los billetes adulterados, productos al por mayor. La Policía Judicial señala que en Ecuador no hay talleres clandestinos dedicados a esta actividad ilegal, sino que ingresa, en un gran porcentaje, desde Perú. Informes del Servicio Secreto de EE.UU. señalan que actualmente ese país es el principal productor de dólares falsos a escala mundial. *Diario El Comercio.* 28/06/2015.

388 organizaciones criminales desarticuladas alrededor del país. Hasta mayo del 2015 los agentes de la Policía Judicial desarticularon un promedio de 2,5 organizaciones criminales diarias, dedicadas a diferentes modalidades delictivas, lo cual ha permitido la captura de 1.658 perso-

nas que integraban este tipo de grupos, que se estima habrían integrado 388 organizaciones criminales, ahora desarticuladas, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior. *Diario El Telégrafo.* 29/06/2015. **Desde el mes de enero a agosto del año 2015, la Policía Antinarcóticos ha decomisado 55,52 toneladas de droga.** La Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía realizó, desde enero a agosto del 2015, un total de 5.357 operativos que dieron como resultado el decomiso de 55,52 toneladas de droga, según información del Ministerio del Interior. Producto de las operaciones fueron detenidos 6.245 infractores, de los cuales 541 son menores de edad. Del total de droga incautada, el clorhidrato de cocaína representa el 82,10%, mientras que el 16,07% corresponde a marihuana, el 1,72% a pasta base de cocaína; y el 0,12% a heroína. *Diario El Telégrafo.* 17/08/2015.

80 guías penitenciarios han sido separados de los centros de rehabilitación social desde el año 2014. La Viceministra de Atención a Personas Privadas de Libertad, enfatizó que es indispensable el proceso de depuración y que desde el año 2014 ya han sido separados de los Centros de Rehabilitación Social, 6 policías y más de 80 agentes penitenciarios. El lugar que ocupaban los uniformados separados será suplido temporalmente con una redistribución del personal que presta servicios en los centros de rehabilitación del país con menos población penitenciaria. La Viceministra Benítez explicó que está en proceso una convocatoria para completar el cupo de 700 nuevos guías penitenciarios y que ya se han postulado 3.651 hombres y mujeres. *Diario El Telégrafo.* 01/08/2015.

Policía Nacional capturó a dos dirigentes del Frente 48 de las FARC en la provincia de Sucumbíos. Dos ciudadanos con orden de difusión azul de la Interpol, vinculados al Frente 48 de las FARC, fueron detenidos en la provincia de Sucumbíos, debido al trabajo conjunto entre las Policías de Ecuador y Colombia. El Viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes, junto al general Lino Proaño, Director General de Operaciones de la Policía, informó que el operativo contó con el apoyo de 50 agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, de la Dirección General de Inteligencia, Grupo de Intervención y Rescate, Policía Judicial, Fiscalía y Migración. *Diario El Comercio.* 08/08/2015.

Policía de la provincia de Carchi recibe chalecos y radios troncalizadas para fortalecer trabajo en frontera ecuatoriana norte con Colombia. La entrega de equipos logísticos policiales por parte del Ministerio del Interior y la Comandancia General de Policía del Ecuador a la Subzona de Policía de la provincia de Carchi, busca mejorar la operatividad de las fuerzas del orden en la frontera norte con Colombia. Édgar Proaño, comandante de la Subzona de Policía de la provincia de Carchi, informó que la delincuencia se redujo en el período de enero a agosto de 2015 en la provincia, en 25% en relación al año 2014. También se refirió a los logros del trabajo binacional coordinado con Colombia e Interpol. *Diario El Comercio.* 28/08/2015.

FUERZAS ARMADAS EN SEGURIDAD CIUDADANA

4.457 operaciones de protección fronteriza ejecutaron las Fuerzas Armadas entre enero y junio del año 2015. Las Fuerzas Armadas

(FFAA.) ejecutaron 4.457 operaciones militares desde enero hasta junio del año 2015. Además se realizaron 1.335 operaciones fluviales, ejecutadas en las vías navegables fronterizas para impedir actividades ilícitas. Las tareas de vigilancia y control del límite político internacional están a cargo de los comandos operacionales, actividades que se realizan a través de patrullajes terrestres, fluviales y aéreos. Los controles mantienen la soberanía nacional y la seguridad del límite político internacional. *Diario El Telégrafo.* 13/07/2015.

Fuerzas Armadas se suman a los operativos por la seguridad en la ciudad de Guayaquil. Durante un operativo de control conjunto ejecutado por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y las Fuerzas Armadas (FFAA), se retuvieron en apenas 3 horas de acción, a 38 motocicletas. Los controles se dieron en la vía Perimetral y avenida Casuarina, noroeste de la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas. Del mismo participaron 30 efectivos de la CTE y 20 miembros del Ejército. La labor de las FFAA se centró en el control de armas para lo cual eran revisados conductores y acompañantes, así como el vehículo. Según la CTE, por la avenida Casuarina circulan alrededor de 250 motocicletas al día. Sin embargo, para la Comisión de Tránsito del Ecuador es prioritario el control de manera permanente de los vehículos que transitan de manera irregular dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil. De enero a agosto del año 2015, se han retenido aproximadamente 5.000 motocicletas, por diferentes causales que con evidencia o sospecha, atentaban contra la seguridad ciudadana. *Diario El Comercio.* 24/08/2015.

POLICÍA NACIONAL

17 agentes del GOE son buzos de primer nivel. Con el título de instructores de primer nivel, 17 agentes del orden culminaron el II Curso Nacional y I Internacional de Instructores de Buceo, dictados en las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), en la ciudad de Guayaquil. Los gendarmes de las policías de Ecuador, México y Panamá fueron capacitados por uniformados del GOE, en colaboración con instructores Carabineros de Chile. Los participantes fueron habilitados de forma técnica y operativa. Ahora están en capacidad de formar nuevos elementos y otorgarles licencia de categoría internacional. El instructor Ramiro Zapata, profesor de Carabineros de Chile en la rama de buceo, explicó que hace 5 años Chile y Ecuador intercambian conocimientos técnico y teórico para incursionar en aguas confinadas y abiertas. *Diario El Telégrafo.* 28/06/2015.

Policía aceptará aspirantes de 29 nacionalidades indígenas. La Policía inició por primera vez la convocatoria para que ingresen a sus filas aspirantes indígenas de las 29 nacionalidades y pueblos que son reconocidos en Ecuador. El propósito es que cuando terminen la formación, regresen a afianzar la seguridad de sus comunidades de origen. En la primera convocatoria fueron seleccionados 996 aspirantes, de los cuales 156 son shuaras y el resto es de los pueblos quichuas de la Sierra. El director de la Oficina de Protección de Derechos del Ministerio del Interior, Raúl Lema, indicó que el cambio del modelo educativo de la institución permitirá que los indígenas elijan la profesión y luego de 20 meses de estudio obtengan el título de tecnólogos en ciencias policiales y seguridad. *Diario El Telégrafo.* 30/06/2015.

Policías pagaban para no ser removidos o trasladados. José Serrano, Ministro del Interior, informó que se descubrió una red de corrupción dentro de la Policía Nacional que supuestamente cobraba entre USD 1.500 y USD 5.000 por los pases (o traslado a otros lugares de servicio) de uniformados. Dentro de la Policía Nacional, altos cargos utilizaban la razón del “pase” a manera de sanción, cuando los policías no acataban las órdenes de sus superiores, de modo que estos los trasladaban a un diferente lugar de servicio lejos de su original o a resguardar los alrededores de los centros penitenciarios. Con el propósito de evitar el traslado, varios policías se veían obligados a pagar dichas cifras para no separarse de sus familias ni de su espacio de trabajo. En otros casos se pagaba aún más para evitar que sean removidos de las filas. *Diario El Telégrafo. 05/07/2015.*

3 generales más antiguos serían terna para nuevo comandante de la Policía Nacional. El presidente de la República, Rafael Correa, analizará el reemplazo del comandante general de Policía, Fausto Tamayo, quien renunció luego de 9 meses de ocupar este cargo; de una terna conformada por los generales más antiguos de la institución, integrada por: Patricio Pazmiño, jefe de Estado Mayor, y al momento está encargado de la Comandancia; Juan Carlos Barragán, inspector de Policía; y, Diego Mejía subsecretario de Policía. *Diario El Telégrafo. 07/07/2015.* **Nuevo comandante general de la Policía.** El Presidente Rafael Correa agradeció mediante Decreto Ejecutivo a Patricio Pazmiño, general de Policía, que desempeñó el cargo de comandante general interino de la Institución del Orden, mientras se elegía nuevo comandante General de la Policía tras la renuncia de este cargo de Fausto Ta-

mayo. El cargo recae desde septiembre de 2015 en Diego Alejandro Mejía Valencia, general inspector quien durante su carrera ha desempeñado funciones como: agregado de policía en los Estados Unidos de Norteamérica, director General de Inteligencia y subsecretario de Policía. A su hoja de vida se suman innumerables felicitaciones públicas por su destacada labor y la condecoración en el grado de “Cruz del Orden” en Seguridad Nacional. *Diario El Telégrafo. 08/09/2015.*

Seis Policías dados de baja en el proceso de autodepuración de la Policía Nacional, en la provincia de Esmeraldas presentan querrela penal contra el Ministro José Serrano. Seis policías que fueron dados de baja en la provincia de Esmeraldas presentaron una querrela penal por injurias calumniosas graves contra el Ministro del Interior, José Serrano, en la Corte Nacional de Justicia. Ellos fueron separados de la institución en el mes de marzo del año 2015, junto a otros 72 gendarmes por no aprobar las pruebas de confianza (polígrafo) en la provincia de Esmeraldas. El Ministro Serrano manifestó que estas personas delinquirían con uniformes, y estaban vinculados a bandas delictivas. Como parte del proceso de depuración, se evaluó a más de 600 elementos de la subzona de la ciudad de Esmeraldas que componen el 90% de policías en esa provincia. Los seis policías que presentaron la querrela contra Serrano reiteraron que no pertenecen a bandas del crimen organizado. También indicaron que, luego de someterse a las pruebas de confianza, no les han mostrado los resultados de esas evaluaciones. *Diario El Comercio. 27/07/2015.* **Pruebas de confianza a agentes de seguridad se intensificarán.** El Viceministro del Interior, Diego Fuentes, aseguró

que la institución policial intensificará las pruebas de confianza las cuales han motivado que de enero a julio del año 2015 hayan sido desvinculados 748 uniformados que fallaron la prueba o cometieron actos delictivos en el desempeño de sus funciones. Fuentes mencionó que la evaluación consiste en 4 tipos de análisis a las que son sometidos los policías y que constituyen las pruebas toxicológicas, psicológicas, socio-económicas y poligráficas. Respecto al polígrafo el funcionario indicó que esta prueba la evalúa un técnico experto el cual realiza 4 preguntas referidas para conocer si el miembro policial ha participado en un acto delictivo, si se ha beneficiado de un acto delictivo, si ha entregado información confidencial a grupos delictivos y si consume drogas. En base a estas preguntas, el poligrafista redacta un informe que sirve para determinar la idoneidad del policía. Hasta el momento se han efectuado 7.500 pruebas poligráficas, además tiene que pasar por el polígrafo todos quienes aplican a los cursos para el ascenso al grado superior, a los que conforman las unidades élite de la Policía, y se han iniciado evaluaciones a los guías penitenciarios por pedido del Ministerio de Justicia. *Diario El Telégrafo. 04/08/2015.*

Ministro del Interior planteó fortalecer de forma estandarizada a las Policías de América Latina. El Ministro del Interior, José Serrano, informó que 700 miembros de la Policía Nacional han sido desvinculados de la Institución, durante la inauguración del primer Simposio Internacional Frente a Delitos Sexuales Infantiles, llevado a cabo en la ciudad de Quito. Durante su intervención, Serrano destacó que es importante que se fortalezca la Policía Nacional de manera conjunta y estandarizada en América Latina, para combatir la violencia

criminal. Precisamente, delegados de 14 países debatieron sobre los delitos sexuales infantiles con énfasis en el turismo y la pornografía. De acuerdo con los temas a tratar, Serrano insistió en que el punto de partida no está en cómo se establece el análisis de los niveles de gravedad, sino en cómo se analiza las causas de la violencia criminal que afronta el mundo contemporáneo. *Diario El Comercio*. 02/09/2015.

MILITARES Y MINISTERIO DE DEFENSA

Dos generales de Brigada fueron ascendidos a División en el Ejército. Tras la sesión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Cosupre), ente encargado de evaluar a cada uno de los oficiales y que califica los ascensos, se conoció el ascenso de dos generales de Brigada a División en el Ejército. Otros tres oficiales que no fueron ascendidos presentarán una reconsideración que se la presentará al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (FFAA). Los cinco oficiales en cuestión ya cumplieron cinco años como generales de Brigada en la Fuerza Terrestre. Según la Ley de Personal de FFAA., los uniformados de esa jerarquía que cumplen el período de tiempo deben calificarse para escalar a generales de División. Actualmente, el Ejército cuenta con dos generales de División: Carlos Obando, comandante de la Fuerza Terrestre, y Edwin Freire, jefe de Estado Mayor. *Diario El Comercio*. 03/08/2015.

SUCESOS 30 DE SEPTIEMBRE

Fiscalía reconstruye los incidentes del 30 de septiembre del año 2010. Se realizó la reconstrucción de los hechos del 30 de septiembre del año 2010. Esta indagación previa se realiza de oficio la Fiscalía por el delito

de plagio al presidente Rafael Correa. El proceso es simultáneo a la indagación, que también realiza la entidad por cargos de delito de intento de golpe de Estado. Los fiscales Fabián Salazar y Gustavo Benítez dirigen la reconstrucción de los hechos. Fueron notificados en total 69 funcionarios públicos, entre ellos Rommy Vallejo, secretario de Inteligencia, Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública, el canciller Ricardo Patiño, entre otras dignidades. La diligencia se realizó en las instalaciones del hospital de la Policía Nacional en la ciudad de Quito, por lo que los alrededores del lugar estuvieron con resguardo policial. La diligencia fue declarada reservada, según lo establece el Código Penal vigente. En este proceso está prevista la intervención de 7 peritos venezolanos. *Diario El Telégrafo*. 03/09/2015.

ECUADOR: RELACIONES INTERNACIONALES

Ecuador y Brasil firman memorando para luchar contra el crimen organizado. Representantes de los Ministerios Públicos de Brasil y Ecuador firmaron un memorando para enfrentar el crimen organizado, en particular el tráfico ilegal de personas, de drogas, el lavado de activos y los ciberdelitos. La Fiscalía ecuatoriana y la Procuraduría General de Brasil ratificaron también con este acuerdo su responsabilidad a la hora de luchar para evitar la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos. El fiscal general ecuatoriano y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Galo Chiriboga, agradeció la apertura de su homólogo brasileño para colaborar y fortalecer las investigaciones de los delitos transnacionales y de casos en los que se requiera una asistencia internacional directa. El memorando

se basa en el Acuerdo para Incentivar la Cooperación y Asistencia Legal Mutua entre los Integrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, suscrito en diciembre del año 2003. *Diario El Universo*. 30/07/2015.

Ecuador advierte que suspenderá cooperación judicial con EE.UU. El Fiscal General, Galo Chiriboga emitió un comunicado en que asevera que la Fiscalía de Ecuador dejará de cooperar con Estados Unidos si ese país no entrega a ecuatorianos buscados por la justicia ecuatoriana por delitos de lesa humanidad o malversación de fondos. Chiriboga señaló que ante la falta de cooperación, la Fiscalía ecuatoriana “se opondrá” a las solicitudes de extradición de Estados Unidos. *Diario El Comercio*. 25/08/2015.

ECUADOR: ORGANISMOS INTERNACIONALES

Ecuador preside comunidad de inteligencia policial de Latinoamérica. Ecuador presidirá la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (Clacip) hasta el año 2016, tras ser escogido en la X Cumbre de esta organización, que se clausuró el 14 de agosto del 2015 en Panamá. Los miembros del Clacip se comprometieron a intercambiar información referente a la migración irregular ligada a una política de buen vecino, Trata de Personas, Ciberdelito y además de la creación de unidades especializadas en estos delitos. En la X Cumbre participaron representantes de Argentina, Aruba, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, EE.UU., España, Guyana, Holanda, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. *Diario El Comercio*. 15/08/2015.

PROTESTA SOCIAL

Policía Nacional y Dirigentes Indígenas coordinaron, en la ciudad de Machachi, provincia de Pichincha, la seguridad de los participantes de la marcha indígena que se moviliza a la ciudad de Quito. Dos dirigentes del movimiento indígena y dos altos mandos de la Policía Nacional, mantuvieron una charla antes que la marcha indígena para reclamos y demandas al poder legislativo, se dirigiera desde la ciudad de Machachi a la ciudad de Quito. La reunión se hizo en la sede de la Unión Nacional de Educadores del cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, para discutir la seguridad de los participantes de la marcha. *Diario El Comercio.*

11/08/2015. Ministerio del Interior advierte sanciones contra quienes agredan a policías. La Policía Nacional alistó un operativo de seguridad para la jornada de manifestaciones que se desarrolló en la ciudad de Quito el 13 de agosto. El Viceministro del Interior, Diego Fuentes, informó que 5.000 uniformados se sumaron a los 8.000 que controlan el orden público en la ciudad de Quito. No se permitirá ningún cierre de vías, tampoco la paralización de dependencias públicas, ni la destrucción de la propiedad pública ni privada. Fuentes también advirtió que las agresiones a los uniformados serán sancionadas, tras captar en video y detener en delito flagrante a las personas que golpeen a los uniformados. Con la

evidencia en imágenes de video sobre lo ocurrido se los llevará ante la justicia. Fuentes también indicó que no se permitirán las agresiones contra civiles ni periodistas. *Diario El Comercio*. 12/08/2015. **Protestas del paro nacional dejó varios detenidos, y civiles y policías heridos.** Las protestas efectuadas durante el mes de agosto del año 2015, convocadas la mayoría por simpatizantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), produjeron la detención de 126 personas en 10 provincias del país. Los detenidos, según las autoridades, protagonizaron actos violentos, los cuales se circunscriben en 5 tipos de delitos penales que son investigados por los fiscales de cada provincia. *Diario El Telégrafo*. 03/09/2015.

MODIFICACIÓN DE TABLAS DE CANTIDADES DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS (CONSEP)

El Consejo Directivo del CONSEP, en la cual participan las máximas autoridades de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, de los Ministerios de Salud Pública, Educación, Inclusión Económica y Social, Justicia, Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana e Interior, presidido actualmente por el Procurador General del Estado, en sesiones extraordinarias realizadas el 07 y 09 de septiembre del 2015, analizó el contenido de las tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala . Finalmente, resolvió reducir las cantidades de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas para dar mejor atención desde la justicia a casos de microtráfico, en los que menores de edad se ven afectados.

*Boletín de Prensa CONSEP. 11/Sep/2015. <http://www.prevenciondrogas.gob.ec/?p=7162>

****** Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica (Andes). 10/Septiembre/2015. <http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-fortalece-lucha-contramicrotrafico-nueva-tabla-sancionar-posesion-drogas.html>

TABLA N° 1: SANCIÓN A POSESIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES (APROBADA EN SEPTIEMBRE DE 2015)

	HEROÍNA		PASTA BASE COCAINA		CLORHIDRATO DE COCAINA		MARIHUANA	
Escala (gramos) Peso Neto	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Mínima	0	0,1	0	2	0	1	0	20
Mediana	0,1	0,2	2	50	1	50	20	300
Alta	0,2	20	50	2 000	50	5 000	300	10 000
Gran Escala	20 en adelante		2 000 en adelante		5 000 en adelante		10 000 en adelante	
Elaborado por Programa DSD. Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica (Agencia Andes)								

TABLA N° 2: SANCIÓN A POSESIÓN DE SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS (APROBADA EN SEPTIEMBRE DE 2015)

	ANFETAMINAS		METILENDIOXIFENETILAMINA (MDA)		CLORHIDRATO DE COCAINA	
Escala (gramos) Peso Neto	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Mínima	0	0,090	0	0,090	0	0,090
Mediana	0,090	2,5	0,090	2,5	0,090	2,5
Alta	2,5	12,5	2,5	12,5	2,5	12,5
Gran Escala	12,5 en adelante		12,5 en adelante		12,5 en adelante	

Elaborado por Programa DSD. Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica (Agencia Andes)



Comité Editorial:

- Bertha García Gallegos
- Francisco Rhon Dávila
- Juan Pablo Aguilar
- Marco Romero Cevallos

Asesoramiento Internacional:

- Dr. Gustavo Suárez Pertierra – UNED (España)
- Dr. Louis Goodman – American University (USA)
- Dra. Sonia Alda - Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado - España

Investigadores:

- Susana Espinosa Soto
- Emilia Banda Capelo
- Emilia Alvear Rodríguez
- Julián Soria Delgado

Programa Democracia, Seguridad y Defensa

Dirección: Av. 12 de Octubre y Patria, Universidad Católica. Torre 2, piso 9, oficina 901.

Teléfonos: (593-2) 299 1041 / (593-2) 299 1700 ext. 1474 / 1041

e-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares: programa.dsd.puce@gmail.com

www.programadsdpuce.host56.com

